

III Jornadas Agrarias y Agroindustriales
Universidad Nacional de Buenos Aires - Argentina

HISTORIA ECONOMICA DEL SECTOR AGROPECUARIO
ARGENTINO EN LOS AÑOS '90

Lic. Lorena Tedesco - Mg. Marta S. Picardi de Sastre
Departamento de Economía – Universidad Nacional del Sur - Bahía Blanca
Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires

INTRODUCCION

El presente de una nación es una síntesis de todos los acontecimientos tejidos a lo largo de su historia. Por ello la Argentina de principios del siglo XXI puede ser comprendida contrastando el presente con el pasado.

A lo largo de las cuatro primeras décadas del siglo XX, el sector agropecuario jugó un rol preponderante dentro de la economía argentina. Eramos el “granero del mundo” lo cual significaba un importante ingreso de divisas. A partir de allí, el sector fue relegado en pos de una política de industrialización basada en la sustitución de importaciones. Hacia los '70 se recogieron los frutos de las mejoras tecnológicas introducidas en los años anteriores, saliendo poco a poco del estancamiento.

Finalmente, con las reformas impuestas en la década del '90 sufrió importantes transformaciones. La empresa agropecuaria requirió un manejo más profesional para paliar el fuerte impacto sobre la rentabilidad negativa provocada por la baja de los precios internacionales que junto con las condiciones del nuevo modelo económico provocaron una crisis del pequeño y mediano productor.

Algo ocurrió en la implementación de sus políticas económicas que se proyectó en el tiempo instalando la desazón.

Por lo anterior, nuestro objetivo es analizar a través de un enfoque histórico la evolución económica del sector agropecuario durante los años '90 con el fin de evaluar los factores que lo indujeron a la crisis que enfrentó a fines del siglo pasado. La hipótesis del trabajo es que tanto las condiciones internacionales (precios de los productos y subsidios a los productores por parte de los países desarrollados), como las nuevas reglas de juego derivadas de la política interna de desregulación y privatización que caracterizó a esa década, determinó la crisis de los pequeños y medianos productores rurales.

1. ANTECEDENTES

La mayor aspiración de Raúl Alfonsín al asumir la presidencia de la Nación en 1983, fue la de consolidar el consenso democrático que reclamaba la sociedad civil, la modernización del país, el pluralismo y la paz.

En el terreno cultural y en el de las relaciones exteriores el gobierno radical pudo avanzar con relativa facilidad, no así cuando afrontó los problemas de las dos grandes corporaciones que él había denunciado en la campaña electoral: la militar y la sindical.

En 1983, la inflación estaba institucionalizada y todos los actores habían incorporado a sus prácticas el supuesto de la incertidumbre y de la especulación que, junto al déficit fiscal y la deuda externa constituían la parte más visible del problema en una economía estancada desde principios de la década, cerrada, ineficiente y vulnerable.

A mediados de 1984 se constituyó una comisión para elaborar un plan económico, presidida por el ministro de Economía Bernardo Grispun, que se ajustó a las fórmulas

dirigistas y redistributivas clásicas. Su estrategia fue mantener un alto nivel de empleo, típico instrumento de estímulo a la demanda, y combatir la inflación con una política de ingresos. Así fue como después de un aumento de sueldos, se estableció un sistema de pautas para dirigir su evolución y la de los precios, el tipo de cambio y las tarifas de los servicios públicos.

En la lucha contra la inflación los resultados no fueron los esperados ya que se fue abriendo una brecha entre las variables que obligó a nuevos aumentos de los salarios. Para evitar estas descompensaciones, el mecanismo se automatizó desembocando en un esquema de indexación salarial continuo.

En 1984 hubo una reducción del déficit fiscal producto no de una mejor recaudación sino de reducciones del gasto público. Entretanto el Ministro Grispun inició las negociaciones por la deuda externa con la esperanza de que la llegada de la democracia mejorara las condiciones ante los acreedores. La ayuda externa seguía dependiendo de un programa de ajuste centrado en reducir el déficit fiscal, bajar la tasa de inflación y controlar la oferta monetaria. Finalmente el gobierno firmó en setiembre de ese año el acuerdo con el FMI.

En febrero de 1985 Grispun presentó su renuncia ante el aceleramiento inflacionario y la recesión. Fue reemplazado por Juan V.Sourrouille, quien inmediatamente preparó el denominado Plan Austral. El mismo incluía el congelamiento de precios, salarios y tarifas de servicios públicos y la promesa del Gobierno de dejar de emitir dinero y de eliminar el déficit fiscal. La nueva moneda, el austral, representaba el compromiso de detener la marcha ascendente de la inflación, objetivo que rápidamente se cumplió, ganándose así el apoyo general y de importantes entidades empresarias como la Sociedad Rural Argentina y la Unión Industrial Argentina.

No hubo caída de la actividad ni desocupación, que tradicionalmente eran la clave de los planes de estabilización. Tampoco se afectó a los sectores empresariales incluyendo a los que lucraban con el Estado cuyos contratos en general fueron respetados.

Los acreedores externos se mostraban tranquilos por la manifiesta intención del gobierno de cumplir los compromisos, por el estado de las finanzas estatales y por el apoyo que el Plan recibió del gobierno norteamericano, pero esta situación duró poco. Ya desde fines de 1985 se advirtió el retorno de la inflación. Influyeron en parte las dificultades crecientes en el sector externo debido al descenso de los precios mundiales de los cereales a raíz de decisiones políticas de Estados Unidos, que afectó tanto a los ingresos del Estado como al de los productores rurales. En la producción agrícola también pesó el tipo de cambio fijo y las retenciones a las exportaciones. Reaparecieron las pujas corporativas que realimentaron la inflación: la CGT embanderada contra el congelamiento salarial que afectaba sobre todo a los empleados estatales, y los empresarios, liderados por los productores rurales, que se movilizaron contra el congelamiento de precios.

Esto significaba que en el fondo nada había cambiado demasiado, que el Plan había dado sus frutos en el corto plazo pero que no preveía cambiar las condiciones de fondo, es decir, avanzar con las reformas estructurales necesarias tales como la reducción del Estado, la apertura de la economía y el equilibrio en los sectores fiscal y externo.

En julio de 1987 el gobierno encaró un nuevo plan de reformas que contó con el apoyo de los principales organismos externos, como el Banco Mundial, y que procuró conciliar la necesidad del ajuste del Estado con los intereses de los grandes empresarios. Se trataba de una política impositiva más dura acompañada de una política de privatización de empresas estatales y una drástica reducción de gastos. Pero este intento nació sin la

fuerza política, sobre todo después de la derrota electoral de 1987, en la que el peronismo se negó a respaldar reformas cuyo costo social era evidente.

La proyectada reconciliación con las corporaciones, con el consiguiente deterioro de la imagen del gobierno ante la comunidad, tampoco rindió frutos en el campo económico.

En enero de 1988, cuando el Banco Mundial y el FMI anunciaron que no seguirían respaldando al gobierno, el edificio se derrumbó. En febrero de ese año se produjo una corrida cambiaria que continuó con hiperinflación hasta la entrega del gobierno.

En agosto de ese mismo año, el gobierno hizo un último intento por controlar las variables económicas con el llamado Plan Primavera con miras en las elecciones de mayo de 1989. En paralelo, el candidato peronista, con un discurso nacionalista y populista, complicaba aun más el panorama.

Carlos Saúl Menem se dirigía en su campaña a los más humildes prometiendo la revolución productiva y el salarizado, pero también tejió en privado alianzas con los grandes intereses corporativos. En suma, nadie sabía que haría el candidato peronista, pero estaba claro que el mandato popular ya no era de naturaleza institucional como en 1983 sino económico: había que salir de la hiperinflación.

El debate sobre los problemas económicos argentinos se alimentaba de las ideas preponderantes en la época tales como la de revalorización del mercado frente a un Estado que ya desde los años '70 era cuestionado como productor de bienes y servicios y como el planificador. Menem estaba decidido a seguir este camino de reformas estructurales para alcanzar la estabilidad y restablecer el orden económico, respaldado por la situación económica mundial que favorecía la reforma integral del estado, apertura comercial y del mercado de capitales.

2. LA POLITICA ECONOMICA AGROPECUARIA

Cuando Raúl Alfonsín asumió la presidencia, el problema económico más apremiante era la deuda externa. Los intereses de la misma comprometían el 50% de las divisas generadas a través de las exportaciones. No menos importante era la recesión del aparato productivo con sus consiguientes efectos de desocupación laboral (5.5% de desempleo y 5.9% de subempleo) y caída de los ingresos de los trabajadores.

Con el fin de solucionar este problema, en 1984 se dictó una ley de promoción de exportaciones la cual buscaba expandir las exportaciones de bienes y servicios, diversificar la oferta, ampliar la presencia argentina en los mercados internacionales, facilitar al fabricante o exportador el acceso a los insumos y bienes de capital, asegurar que los beneficios derivados del comercio exterior alcanzaran a las economías regionales, promover y fomentar la creación de compañías para el comercio exterior e impulsar la integración y cooperación económica y financiera.

Sumado a ello, el Poder Ejecutivo debía promover mediante beneficios impositivos las exportaciones de productos originados en las economías regionales. Además se facultó a las sociedades y cooperativas productoras de bienes y servicios para que constituyeran consorcios y cooperativas de exportación, los que quedarían autorizados para exportar en forma conjunta los productos de las empresas miembros, coordinar las labores de producción, proponer el avance tecnológico y optimizar la calidad de los productos de exportación.

Esta política de promoción de exportaciones fue implementada a través de los decretos 177/85 y 178/85. El primero establecía un régimen de reintegro de los aranceles a las importaciones para las materias primas utilizadas en la elaboración de las mercaderías para exportar. El segundo eximía del pago del impuesto a los sellos a diversos contratos que formalizaran operaciones de exportación.

Dado que la situación no se lograba revertir, en junio de 1985 se lanzó el Plan Austral, en el cual se preveía reactivar la producción mediante la concentración y utilización de los saldos de las divisas provenientes de las exportaciones. Sin embargo, éste también fracasó ya que, entre otras razones, los precios internacionales de los productos agropecuarios cayeron generando desconfianza hacia el plan por parte de todos los sectores económicos.

Dicho plan de estabilización incluyó el congelamiento de precios, salarios y tarifas, la promesa de no emitir dinero y de eliminar el déficit del Estado. Sin embargo, estas poco novedosas medidas chocaron con algunas dificultades. Por un lado, la situación de los mercados internacionales no era la más apropiada para la expansión de las exportaciones agropecuarias argentinas ya que predominaban políticas proteccionistas en los países compradores. Por el otro, los términos de intercambio se habían deteriorado. No obstante, quedaban los países importadores del Este, como la URSS, pero ello no representaba ninguna garantía. Además, la CEE había comenzado a volcar sus excedentes al mercado mundial a precios muy bajos.

Sumado a ello, la devaluación del peso argentino fue compensada con el aumento en los derechos a la exportación de productos del sector agropecuario, lo que provocó que se redujeran los precios netos de exportación hasta que a principios de 1986 se abandonó este recurso fiscal por tres causas: la disminución en el volumen de exportaciones que provocaba una menor recaudación de derechos, la caída de los términos de intercambio y la mejora en la situación fiscal que hacía menos indispensable esta medida.

Paralelamente, los créditos subsidiados al sector fueron eliminándose, pasando del 26% del PBI agropecuario al 15% en 1987 (Reca, L., 1996).

Al mismo tiempo, la estabilización de precios alcanzada en el inicio del Plan Austral, provocó un “efecto riqueza” que aumentó la demanda, hecho reforzado por las

necesidades derivadas del PAN (Programa Alimentario Nacional) que también elevó los requerimientos de alimentos, induciendo a un aumento de sus precios.

Es necesario destacar que el gobierno de Raúl Alfonsín debió afrontar no sólo un acentuado deterioro de los términos del intercambio y el cierre continuado de mercados de exportación, sino también factores climáticos adversos en 1987-1988.

Toda esta coyuntura condujo a que en 1989 la Argentina viviera una profunda hiperinflación. Los precios al consumidor se elevaron un 4923% lo que determinó una caída de reservas de divisas, atrasos en los pagos externos, desequilibrio fiscal, recesión y alto desempleo. Con respecto al sector agropecuario, se evidenciaba un alto endeudamiento y caída de los precios internacionales.

Por distintas vías el capital drenaba hacia el exterior, la economía se había dolarizado sin que dieran resultado las medidas aplicadas por las autoridades económicas.

En medio de este desorden económico y manifestaciones sociales se llevaron a cabo las elecciones presidenciales de 1989. Los partidos que participaron fueron: UCR, FREJUPO y Alianza del Centro. Venció por mayoría el peronista Carlos Saúl Menem. Sus propuestas incluían una apuesta a la multiplicación de la producción agropecuaria, para lo cual estaba convencido de que Argentina poseía los recursos necesarios: tierras en cantidad y calidad suficiente, productores con calificación adecuada, climas favorables y diversidad de cultivos, esperando los estímulos adecuados.

Para iniciar tal revolución exportadora era necesario un tipo de cambio que garantizase rentabilidad suficiente a toda la producción rural y no dejara lugar a dudas sobre la conveniencia de reinvertir en el sector. Se debía desarrollar también una política financiera sumamente activa y promocional para el campo argentino. Crédito subsidiado para la compra de tractores, semillas, insumos, apoyo a los equipos técnicos, innovación

tecnológica, colonización de tierras fiscales y mejora en los sistemas de comercialización, conformarían la estrategia del gobierno.

Esta política no ignoraba que además de aumentar la producción con el fin de exportar sería necesario venderla en un mundo donde el subsidio de los países desarrollados a su propia producción agrícola deformaba las leyes del mercado. Se apostaba a capturar nuevos mercados y para ello era indispensable definir una estrategia basada en una sana agresividad comercial.

Menem estaba convencido que si el Estado y el sector rural argentino se asociaban en un gran esfuerzo de conquista de nuevos mercados, sería posible optimizar el ingreso de divisas y lograr un crecimiento de la producción y la productividad agrícola sostenible en el largo plazo.

De todas maneras, en sus propuestas advirtió que esta auténtica revolución verde no implicaba reducir nuestro modelo de desarrollo a una visión exclusivamente agropastoril, sino que la vuelta al agro sería con el fin de incentivar el crecimiento industrial. A la expansión cerealera debería agregársele el impulso a la agroindustria. Por otra parte, dado que la industrialización de productos agropecuarios favorece a las regiones donde éstos se encuentran, se reforzaría la concepción federal de la economía. Además, el gobierno estaba convencido que tales transformaciones en la economía deberían hacerse recurriendo al capital extranjero, ya que lejos de ser colonizante para nuestro país eran la fuente necesaria de recursos para tan ambicioso objetivo.

Así es como la meta de este primer plan de gobierno, denominado Bunge y Born (BB), era triplicar las exportaciones argentinas en pocos años contando sobre todo con los mercados del Norte y del Extremo Oriente, suponiendo a la vez una altísima capacidad de respuesta de la oferta del sector junto a una fuerte demanda dispuesta a absorber semejante incremento en la disponibilidad de alimentos. Ambos supuestos, sin embargo,

sin ser necesariamente muy fantasiosas, requerían un análisis de factibilidad previo, riguroso y serio, que no parece haberse realizado (Sukub, V.; 1992).

Desde el punto de vista interno, no cabe duda de que existían todavía muchas posibilidades de expandir la oferta agropecuaria exportable mediante la incorporación de los nuevos paquetes tecnológicos disponibles en el mercado. Sin embargo, no se consideró que el aumento en la oferta exportable en pocos años era difícil de alcanzar dadas las condiciones de postración financiera, de desconfianza crónica de empresarios nacionales e internacionales en la economía argentina y sus conductores, de deterioro avanzado de infraestructuras de transporte, etc.

Además, no parece menos aventurado pensar que el mercado mundial podía absorber fácilmente y sin baja de precios, cerca de 20 mil millones de dólares adicionales de exportación de tales productos. Siendo posible encontrar algunos mercados dinámicos en Japón, China, Brasil y otros países, hay que pensar que Argentina tuvo y tiene competencia en la disputa por los pocos mercados solventes importadores de granos.

En resumen, la viabilidad del plan BB estuvo determinada fundamentalmente, por la posibilidad o no de alcanzar nuevas -o viejas- ventajas comparativas internacionales en el campo de la producción agropecuaria. El país seguía evidentemente con importantes ventajas comparativas naturales pero no tenía las mismas ventajas a nivel comercial. No cabe duda que Argentina puede producir trigo a menor costo que Francia, por ejemplo, pero el hecho es que la “política agrícola común” de la CEE no sólo bloqueó una posible expansión de ventas argentinas en Europa sino que también significó una notable competencia desleal a nivel de terceros mercados.

Más tarde, el gobierno implementó los Planes Erman I al VII apostando al crecimiento de las exportaciones agropecuarias en un marco tradicional de ventajas comparativas.

Sin embargo, siguió enfrentando el abismo entre la retórica librecambista y las prácticas proteccionistas y desleales de los países del Norte.

Un nuevo programa económico, iniciado en 1991, introdujo profundas reformas en general y en particular sobre el sector agropecuario. El tipo de cambio fue fijado por la Ley de Convertibilidad. Se puso fin a la intervención del Estado en el comercio de granos y se eliminaron las retenciones a las exportaciones de productos agropecuarios, así como los subsidios a las tasas de interés de los préstamos al sector. Se reformuló el sistema impositivo y se autorizó la importación sin gravámenes de fertilizantes y agroquímicos no fabricados en el país. Se desreguló el transporte de productos agrícolas y se redujeron los costos de operación portuaria.

Aparentemente el sistema de precios comenzó a reflejar con mayor claridad el costo de oportunidad de los factores de producción y de productos. La estabilidad monetaria alentó una programación más racional en el uso de los recursos agrícolas y una mayor incorporación de capital y tecnología. Además, a nivel nacional la política agropecuaria previó algunos programas orientados a revertir la situación de las economías regionales a cargo del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Sumado a ello, una nueva modalidad crediticia fue el financiamiento de exportaciones por la cual se fijó una tasa preferencial para cultivos de exportación. Eran créditos de corto plazo que cubrían sólo el ciclo productivo.

Debido a lo anterior, el monto de la deuda por unidad de producto agropecuario creció significativamente en los últimos años sin reflejarse en aumentos comparables en los ingresos del campo ya que a pesar del significativo incremento en el volumen de producción, la fuerte caída de los precios afectó seriamente la rentabilidad.

Respecto al comercio exterior, la negociación de la Ronda Uruguay del GATT tuvo importantes implicaciones para la agricultura. El acuerdo incluyó cuatro áreas: subsidios a la exportación e internos, acceso a mercados y aspectos financieros y fitosanitarios.

Ello generó expectativas positivas para Argentina, ya que limitaría los perjuicios económicos derivados de las políticas proteccionistas utilizadas por los países industrializados. Sumado a ello, la creación del Mercosur posibilitó la concreción de un gran flujo de comercio regional.

Sin embargo, rápidamente el comercio y la producción dentro del Mercosur se vieron afectados por la compleja interacción de los diferentes componentes de la estructura de impuestos y de reintegros al comercio intrabloque, el arancel externo común y sus excepciones. Además, hubo otros factores que afectaron los patrones de producción y comercio, tales como el grado de control sobre las importaciones de países que subsidian sus exportaciones, el grado de sincronización entre el ciclo económico de Brasil y Argentina y, las asimetrías en políticas macroeconómicas y agropecuarias.

3. LA RESPUESTA DEL SECTOR

En el marco general plateado hasta aquí, la evolución del sector agropecuario en la Argentina durante el período 1990-2000 fue excepcional en términos productivos (Cuadro I). Sin embargo, la situación del sector en términos socioeconómicos no evolucionó de la misma forma. De hecho, lo paradójico es el crecimiento de la producción y de la productividad del sector agropecuario argentino en paralelo con una abrupta caída en la rentabilidad y un brusco cambio en la estructura productiva.

CUADRO I: Producción agropecuaria

PRODUCCION	CAMPAÑA	CAMPAÑA
	90/91	97/98
cereales (miles tn.)	8.325,7	65.793,0
Oleaginosas (miles tn.)	15.701,0	25.059,0
Leche (mill. de litros)	6.093,0	9.450,0
Bovinos (miles de cab.)	47.075,2	50.058,9
Té (miles tn.)	193,6	245,8
Yerba mate (miles tn.)	464,0	860,4
Limón (miles tn.)	642,8	1020,9

Fuente: INDEC 2000 – SAGPyA (1998)

El crecimiento en la producción se tradujo en un importante aumento de las exportaciones de productos primarios y de manufacturas de origen agropecuario (Cuadro II).

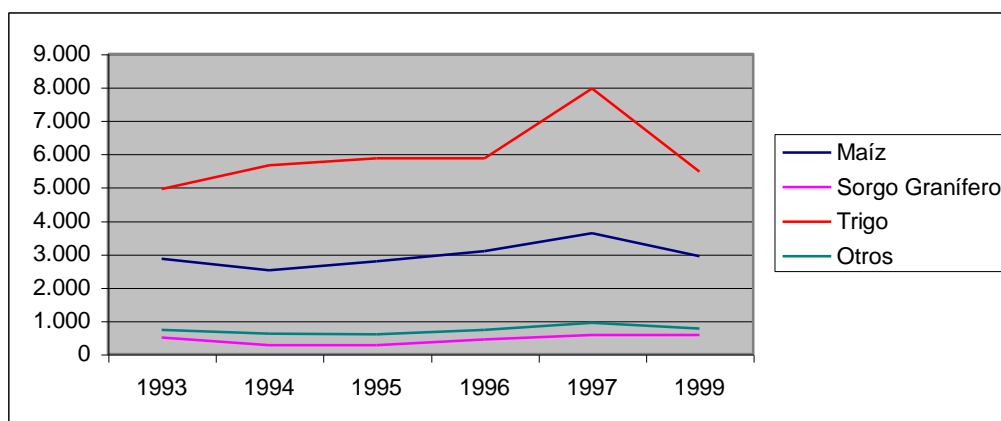
CUADRO II: Exportaciones Agropecuarias (en millones de U\$S)

	1987	1988	1990	1998
Primarias	1.731,4	2.269,3	3.339,1	6.603,3
MOA	2.836,9	4.075,9	4.663,9	8.762,0

Fuente: Ministerio Economía (1995) - IICA(1999)

Este fenómeno se debe, en particular en el caso de los granos, a la ampliación de la frontera productiva a partir de la incorporación de tierras marginales (Gráfico I) en paralelo con la adopción de tecnología y en función de coyunturas de altos precios internacionales como los ocurridos en las campañas 1996/1997 (Gráfico II). A ello debe sumársele la erradicación de la fiebre aftosa, nuevas prácticas culturales e inversiones de importancia tanto en la producción como en la industria de transformación que lograron aumentar los rendimientos.

GRAFICO I: Área sembrada (miles de hectáreas)

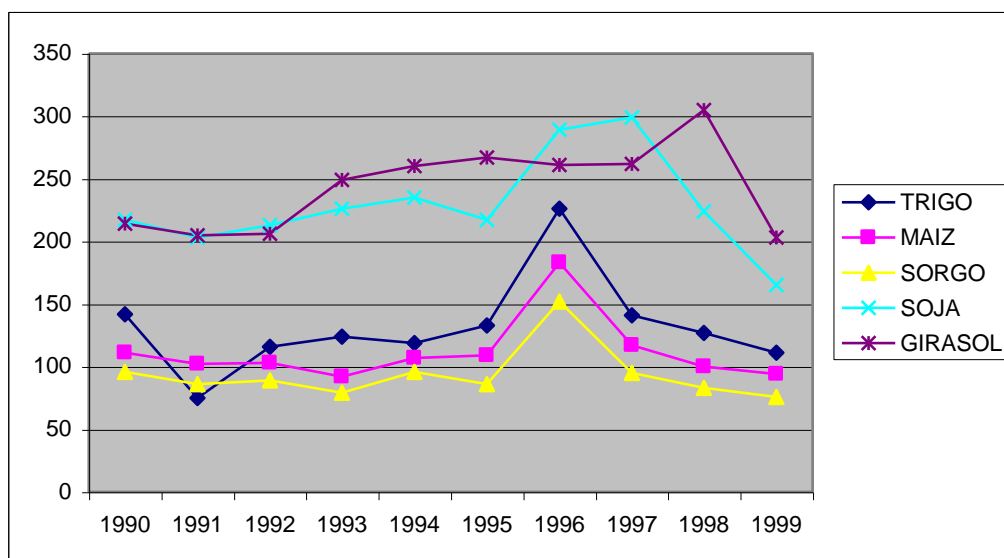


Fuente: INDEC

En 1998 nos sorprendió con una fuerte devaluación. Como resultado de ello, a principios de 1999 enfrentamos una fuerte asimetría en los costos de producción con los cuales resulta muy difícil competir. Sumado a ello, a pesar de los progresos alcanzados

en la Ronda Uruguay del GATT y la posterior constitución de la Organización Mundial del Comercio, los subsidios y su fuerte resurgimiento durante 1998 siguen siendo también temas de preocupación. Más aún al agregarse a ello la crisis financiera internacional que en ese año determinó una baja mayor en el precio de los commodities debido fundamentalmente al descenso del poder adquisitivo como consecuencia de las fuertes devaluaciones de los países asiáticos y al excedente de productos que como resultado de ello se volcó al mercado internacional (Gráfico II).

GRAFICO II: Precios FOB (U\$S por toneladas)



Fuente: SAGPyA

En este contexto el campo argentino arrastró un fuerte endeudamiento provocando que el índice de morosidad, luego de una inflexión coincidente con el efecto de los altos precios agrícolas (1996-1998), retornara a la tendencia creciente de principios de la década (Cuadro III). Ello se tradujo en una interrupción de la cadena de pagos en el sector que exigió el lanzamiento de planes de refinanciamiento excepcionales.

CUADRO III: Evolución de la cartera crediticia agropecuaria (millones de pesos)

Cartera	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999
Total Agrop.	2042	1906	2861	4577	6090	7228	6472	5806	6424	6639	6308
Total	25345	24242	27713	38185	50873	61563	57198	60049	69738	74488	76983
Agrop/total %	8.1	7.9	10.3	12.0	12.0	11.7	11.3	9.7	9.2	8.9	8.2
Morosidad %	28.1	28.8	25.8	23.8	22.0	26.8	29.9	26.2	24.1	19.9	25.6

Fuente: FINAGRO (2000)

Claro que es importante mencionar que, aunque durante la década de los '80 ya los productores habían tomado crédito, el mayor endeudamiento fue consecuencia de la incorporación de cambio tecnológico y de bienes de capital (Cuadro IV). No cabe duda que esto se debe a un cambio cultural que reconoce la condición de una mayor intensidad en el uso de capital y cambios en los modelos y en las tecnologías de producción. Todo esto fue el resultado de la recomposición de la escala de las explotaciones mediante compras, asociaciones e incluso cooperativismo que abarcó alrededor de 93.000 explotaciones familiares, la expansión de la agricultura y del tambo sobre la ganadería y una ganadería más intensiva. Sin embargo se observan consecuencias no deseadas como la salida de productores por falta de escala, inviabilidad financiera o resistencia cultural (Lattuada, 2000).

CUADRO IV: Insumos – Bs. De Capital – Prácticas

	1992	1996/97
Vtas. Fitosanitarios (\$)	336.300.000	924.600.000
Maquinaria Agrícola (unid.)	320	815

Tractores (unid.)	4.871	7.380
Uso de Fertilizantes (kg/ha.)	19	61
Venta de Fertilizantes (tn.)	516.000	1.650.000

Fuente: Chudnovsky, et al., Soc. Rural Argentina, 1999.

Las nuevas reglas de juego: convertibilidad, estabilidad, apertura, Mercosur, subsidios en EEUU y la CEE, tipo de cambio real, presión tributaria, etc., llevaron a que las explotaciones grandes pudieran adaptarse. En cambio los productores medianos, radicados por lo general en las ciudades, se vieron en la encrucijada de sufrir una importante disminución de ingresos y replantearse alternativas. En el caso de los medianos chacareros que vivieron en el campo, la reconversión fue ineludible diversificando o intensificando el manejo de su producción. En cambio, los minifundistas y pequeños productores vieron recrudecer su tradicional situación de indefensión y marginación.

Sin duda uno de los sectores mas golpeados de la última década fue el agropecuario. Factores externos como la lucha que iniciaron en 1985 los EEUU y la CEE subsidiando sus exportaciones e internos como la presión competitiva, dejaron a Argentina fuera de competencia.

La producción ganadera también pagó su tributo, reflejado en la reducción de los rodeos, que sumado a las bajas cotizaciones y la caída del consumo interno preanunciaban su destino. La falta de inversión en mejoras y la sobrecarga de los potreros empeoraron el panorama. La escasa diversificación y las características de monocultivo alentadas por años por los organismos oficiales y técnicos dieron lugar a lo que el cambio de contexto caratuló como ineficiencias productivas olvidando los tiempos que necesita el sector agropecuario para su reconversión. Por supuesto que

hubo conciencia que esto demanda una acción cultural y de apoyo financiero que no ha sido efectivamente instrumentada hasta hoy mientras los productores luchan a diario por modificar su situación que pasa por la banca financiera y la presión fiscal y no por el trabajo agropecuario (Lattuada, 2000).

Sin embargo, en 1995 el negocio agrícola fue excelente. Mientras la economía en su conjunto atravesaba por uno de los más prolongados períodos de recesión desde el inicio del plan de convertibilidad, aparece el sector agropecuario que, pese a su gran atomización, ha demostrado con una rápida capacidad de reacción cómo se puede crecer y mejorar cuando las condiciones internas y externas son favorables. Sin gozar de regímenes de privilegio ni programas especiales aportó el 60% del ingreso total de divisas al país.

Luego de esta situación llegamos a 1998 y vemos que las entidades representativas del sector comenzaron a plantear cuestiones como: “Superficies mínimas para que un campo familiar pueda ser sustentable” (estudio realizado por la Confederación Intercooperativa Agropecuaria - CONINAGRO). Ya en 1999 la política se apropió del campo y luego de muchos años de quietud los dirigentes del sector comenzaron a movilizarse y a arrastrar al productor.

Posiblemente, en los últimos cinco años del siglo pasado el sector agropecuario argentino ha sufrido más transformaciones que en los anteriores 40 años. El gran impulso a la actividad agrícola profesionalizada y la concentración en el manejo de la tierra son las características salientes. El progreso tecnológico aceleró las consecuencias del modelo de transformación general. Cada vez la agricultura fue más capital intensiva y con mayor rapidez fue disminuyendo la intensidad laboral. Las explotaciones agropecuarias tuvieron que transformarse en unidades cada vez más grandes para poder aprovechar las economías de escala y mantener la competitividad. Sin embargo, todo

transcurrió en un marco generalizado de rentabilidad negativa para los pequeños y medianos productores rurales (apenas cubrían los costos variables de producción y sufrían los servicios de su deuda).

La aparente contradicción entre el crecimiento de la producción y la pérdida de rentabilidad del sector pareciera deberse a la alta incidencia de costos fijos sumados a los costos hundidos del arrastre de deuda por más de una década.

Lo llamativo de la evolución tanto de la producción como de la productividad entre los años '80 y '90 es que todo el proceso se dio en un contexto que en los primeros años fue de alta incertidumbre fundamentalmente por problemas inflacionarios - monetarios y, durante los '90 como resultado de graves problemas estructurales de tipo socio - económico.

En este marco el sector agropecuario profundizó su dualidad y el PYME llega al año 2000 asfixiado por una rentabilidad negativa que lo viene castigando desde hace casi un quinquenio.

4. PROBLEMÁTICA DEL SECTOR A PRINCIPIOS DEL SIGLO XXI

De lo anterior surge que respecto al futuro, la participación en los mercados agropecuarios de productos básicos (granos, oleaginosos y derivados), que constituyen una fracción muy importante de las exportaciones nacionales, dependerá de la capacidad que tenga nuestro país para competir con la creciente oferta de alimentos que se origina en los países industrializados. La mayor competitividad resultará de una combinación de políticas macroeconómicas y sectoriales que afecten al sector tanto en la generación de cambio técnico como en otros aspectos tales como la estrategia comercial.

La intensificación de la agricultura requerirá, indudablemente, una expansión en el uso de fertilizantes químicos que comenzó a partir de mediados de los '90 en respuesta a la estabilidad del ambiente económico que alentó la innovación y la supresión de la regulación en el sector, lo cual posibilitó nuevas formas de organización de la producción agropecuaria con el fin de aumentar la productividad.

El sector necesitará además de un adecuado marco macroeconómico, de una demanda suficientemente fuerte de sus productos y de un permanente flujo de tecnologías. Algunas de ellas provendrán del sector público (fitomejoramiento, manejo, conservación del suelo, etc.), dado que sus beneficios no son apropiables y en consecuencia deben ser financiadas con fondos públicos, reservándose al sector privado aquellas actividades cuyos beneficios son apropiables. De todas maneras, es crucial el desarrollo de esquemas institucionales y legales que aseguren la complementariedad entre las diversas fuentes de generación de tecnología.

A principios del año 2000, el problema que más afectó el ánimo de los productores agropecuarios fue el de la creciente presión impositiva. La reforma fiscal se transformó en el detonante de una situación por demás delicada. Las autoridades parecieron ignorar la estrepitosa caída de los precios de los granos y de la hacienda, o lo que es lo mismo, el derrumbe del ingreso del productor.

El proceso de desregulación y privatización implantado por el gobierno nacional dio lugar a una fuerte concentración del poder económico, la brusca eliminación del sistema de regulación agravó la situación, a lo que se sumó el cambio de los precios relativos adverso al sector agropecuario (Sector Primario vs. Bienes y Servicios). La presión tributaria, la falta de créditos accesibles, la necesidad de refinanciar pasivos, son algunas de las razones que imposibilitaron la adecuación al cambio, al que se le obligó a incorporarse y que sólo es posible con una fuerte y continua acción oficial de

orientación y colaboración para el logro de soluciones. Un tema fundamental es que la noción de sector competitivo está siendo dejada de lado, más bien aparece la necesidad de incorporar la importancia de la empresa competitiva como parte de una cadena.

Los resultados económicos de las principales producciones pampeanas no alcanzan para pagar todos los impuestos que la euforia económica de los últimos años impulsó a incrementar sustancialmente a través de la Ley 25063 vigente a partir de enero de 1999.

De ello surge claramente que si la situación es grave para la región pampeana, nada es necesario decir para el resto de las economías regionales que han gozado a perpetuidad de la ignorancia y el desinterés total del gobierno y por lo tanto de la sociedad argentina.

Hay que reconocer que no es un problema de pobreza rural sino un profundo problema estructural. No es necesario subsidiar sino dejar de presionar con impuestos y armonizar cambios. Nuestra hipótesis es que existe un contexto internacional dado que es imposible modificar y dos senderos que en paralelo hay que programar: primero, el Estado debe abrir y consolidar mercados, mejorar la infraestructura, ajustar los programas en las escuelas rurales para responder a las necesidades del sector y contribuir a desarrollar las potencialidades, elevar la autoestima de los pequeños productores rurales, proporcionarles conocimientos útiles que sean aplicables en la solución de sus propios problemas y eliminar el máximo posible de impuestos contenidos en los precios de los insumos agropecuarios y, segundo, el productor debe aceptar ser eficiente con menores recursos, en los aspectos tecnológicos, gerenciales y organizativos de las diferentes etapas del negocio agrícola.

CONCLUSION

La llegada de la democracia mejoró las expectativas de los argentinos pero no logró la tan ansiada derrota a la inflación. La misma se hizo esperar hasta 1991 cuando el Plan de Convertibilidad cambió las reglas de juego de la economía.

Este escenario posibilitó el crecimiento excepcional de la producción agropecuaria, de las exportaciones y la incorporación de tecnología. Sin embargo, desembocó en un proceso de concentración económica y de expulsión de aquellos productores que no lograron reconvertirse a tiempo.

Sin dudas, consolidar nuestro sector agropecuario aumentando la producción y el valor agregado, generando así mayores divisas, resulta una meta deseable para todos. Pero no si esto se traduce en crecientes niveles de desocupación, endeudamiento y desigualdad para los pequeños y medianos productores rurales.

A principios del siglo XXI oímos reclamos de aquellos que se dedican a esta actividad en todas partes del país. Su voz implora rebajas en los costos de producción, mayor estabilidad en los mercados, refinanciación de sus pasivos y sobre todo, políticas que los ayuden a combatir los riesgos climáticos y de mercado a los que se enfrentan a diario.

Es necesaria una reforma del sistema impositivo y una mayor capacitación para apoyar a las PYMES del sector. El Estado junto con las ONGs deberá abandonar el mero asistencialismo para tomar actitudes más agresivas y concretas para permitir la supervivencia de los pequeños y medianos productores por medio de políticas que contemplen la dualidad que se registra en el sector agropecuario.

BIBLIOGRAFÍA

- Carballo C. (1991); “Los pequeños productores y el desarrollo rural en la Argentina”, Realidad Económica, N° 100, 3° bimestre.
- Cristiano G. y Picardi de Sastre M. S. (1999); “Tópicos de la crisis del sector agropecuario argentino”, CD Jornadas Interdisciplinarias de Estudios Agrarios y Agroindustriales, Buenos Aires.
- Chudnovsky D. et al. (1999); “Comercio Internacional y Desarrollo Sustentable”, Centro de Investigaciones para la Transformación, Documento de Trabajo, Bs. As.
- Floria C. y García Belsunce C. (1989); “Historia Política de la Argentina Contemporánea (1880- 1983)”, Ed. Alianza, Bs. As.
- Gerchunoff P. y Llach L. (1998); “El ciclo de la ilusión y el desencanto. Un siglo de políticas económicas argentinas”, Ed. Ariel Sociedad Económica, Bs. As..
- IICA - Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (1991); “Ajuste macroeconómico y sector agropecuario en América Latina”, Bs. As.
- IICA – Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (2000); “El sector agroalimentario argentino 1997-1999”, Bs. As.
- INDEC – Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (2000); en web: www.indec.mecon.ar.
- Lattuada M. (1987); “Política agraria del liberalismo conservador (1946-1985)”, Centro Editor de América Latina, Biblioteca Política Argentina, Bs. As.
- Lattuada M. (2000); “El crecimiento económico y el desarrollo sustentable en los pequeños y medianos productores agropecuarios argentinos de fines del siglo XX”, Jornada Perspectivas Agropecuarias de AAEEA, Bolsa de Cereales de Bs. As.

- Lacki P. (1995); “Desarrollo agropecuario: de la dependencia al protagonismo del Agricultor”, Serie Desarrollo Rural N° 9- 4° edición, FAO-Chile.
- Lacki P.; Buscando soluciones para la crisis del agro: ¿en la ventanilla del banco o en el pupitre de la escuela?, y Rentabilidad en la agricultura: ¿con más profesionalismo? En web: www.rlc.fao.org.
- Peretti M. (1999); “Competitividad de la empresa agropecuaria argentina en la década de los '90”, Revista Argentina de Economía Agraria- Nueva Serie, Volumen II, N°1-Otoño, Bs. As.
- Picardi de Sastre M. S. y Cristiano G. (2000); “La globalización y el PYME agropecuario en la Argentina”, enviado para ser presentado en el XVI Simposio de la Asoc. Internacional de Sistemas Productivos, Chile, noviembre del 2000.
- Picardi de Sastre M. S. y Tedesco L.(2000); “Macroeconomía del sector agropecuario argentino en la década del '90”, XXXI Reunión Anual de la Asociación Argentina de Economía Agraria, Rosario.
- Pucciarelli A. (1993); “Cambios en la estructura agraria de la pampa bonaerense (1960- 1988)” , Ciclos, Vol. III, N° 5, 2° semestre, Bs. As.
- Reca L. (1996); “El nuevo marco macroeconómico y el sector agropecuario argentino: comentarios y reflexiones”. XXVII Reunión Anual AAEEA, Santa Fe.
- Romero, L. (1996); “Breve Historia Contemporánea de la Argentina”, Fondo de Cultura Económica, Bs. As.
- Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación (1998); Argentina agropecuaria, agroindustrial y pesquera, Bs. As.
- Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, En web: www.sagyp.mecon.ar.

- Sukub V. (1992); “El peronismo y la economía mundial”, Grupo Editor Latinoamericano, 1º Edición.
- Valeiro A. (2000), “¿Dónde está la mano invisible?”, EEA INTA Famailá, Tucumán, Argentina.

